

España no actualiza los datos sobre machismo universitario desde 2008

El último estudio reveló que un 65% del colectivo había sufrido o conocía alguna situación de acoso en el ámbito de alumnado, docencia o investigación

NURIA MARRÓN
NÚRIA NAVARRO
GEMMA TRAMULLAS
Barcelona

Más de 25 profesoras e investigadores de universidades españolas han roto su silencio en *El Periódico* -diario editado por Prensa Ibérica, como EL PERIÓDICO DE ESPAÑA- para denunciar el acoso y la violencia machista que han sufrido en el ámbito universitario. Sus historias reflejan que la vida académica está asentada en prácticas de violencia de género que se alimentan en la jerarquía existente en la institución, en la enorme competitividad y en la llamada violencia aisladora, la que sufren las víctimas y quienes (pocos) las defienden.

Es un fenómeno complejo. En parte porque un 90% de las mujeres víctimas del MeToo en la universidad no denuncian los casos de acoso en gran medida por el temor a represalias. Asimismo, no hay datos actualizados que permitan tomar conciencia, abordar la problemática y actuar para zanjarla. En 2008, el Community of Research on Excellence for All (CREA) publicó un estudio pionero sobre la violencia de género en la universidad que determinó que hasta un 65% de universitarios habían pa-

decido o conocían alguna situación de acoso en el ámbito de alumnado, docencia o investigación.

«Las universidades nunca habían tenido ganas de abrir este tema, pero se les obligó desde más arriba», subraya la catedrática Rosa Valls, subdirectora del CREA. Desde entonces, esos datos no se han revisado ni actualizado, a pesar de que el CREA lo ha solicitado hasta en tres ocasiones a la Agencia Estatal de Investigación, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología. Ello hace que las cifras sigan en el limbo.

Tentativas en saco roto

«Desde 2008 no se ha vuelto a hacer ninguna investigación comparativa sobre el tema. Lo hemos intentado pero no hemos tenido apoyo», confirma Patricia Melgar, miembro del CREA. Apunta que desde las comisiones de igualdad cada año hacen públicas cifras, pero estas son solo las de las denuncias. «Una cosa son las cifras de las denuncias, que son bajas porque la mayoría no denuncia, y otra es una investigación como la que realizó el CREA», que da una foto real del problema, argumenta Melgar.

Recuerda la investigadora que «no fue fácil» realizar ese trabajo. «No se recibió con los brazos abier-

tos. Hubo muchas presiones porque no interesaba que salieran los datos. No se ha vuelto a hacer por miedo», asegura. «Hay muchas complicidades entre las universidades y personas con poder. Lo vivimos nosotras cuando lo investigamos», añade Melgar.

Esa investigación, que retrata el estado de la cuestión, es clave para mostrar la magnitud del problema. «Sirve para que la gente sepa que la violencia de género en la universidad no es algo residual, sino que tiene la misma magnitud que la violencia de género en el conjunto

de la sociedad», subraya Melgar. Confía en que dado que la sociedad ha evolucionado después de casi 15 años, un nuevo estudio actualizado «esté al caer».

De hecho, fue a raíz del estudio de 2008 que se impulsó la creación de las unidades de igualdad. Todas las universidades públicas catalanas cuentan con una de estas unidades que han promovido protocolos de actuación para atajar los casos de violencia de género. Han conseguido algunos avances, pero también se han topado con limitaciones de los mecanismos para erradicar el fenómeno así como con distintos grados de compromiso según el centro. Uno de los principales hándicaps reside que en que están dirigidas por el equipo rectoral. Todo depende de su compromiso.

Reacción institucional

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, subraya la necesidad de que las universidades apliquen activamente los protocolos. «Han de promoverlos», insta. Para la delegada, es «importantísima» la propia reacción de la comunidad educativa ante una situación de acoso. Aquí, recuerda que los protocolos pueden «prever medidas para reparar a las víctimas y reacciones contra los agresores, como por ejemplo, las de tipo disciplinarias». Rosell señala la necesidad de «cortar a tiempo» estas situaciones.

Por su parte, Cristina Gelpi, secretaria general del Consejo Interuniversitario de Cataluña, asegura que en esta comunidad «no concebimos un sistema universitario que pueda tolerar el acoso». Y Tània Verge, consejera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat de Catalunya, lanzó en un tuit un «compañeras, os creemos», y ofreció a las víctimas los servicios de la red especializada de su departamento. ■

Ferran Nadeu



Una mujer, en un aula de una facultad de la Universidad de Barcelona.